

## OBSERVATORIO DE REFORMAS POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA

Documento de Investigación No. 01

Serie Análisis de Reformas 2025

Reforma Electoral en Chile: Aumento del requisito de residencia para el sufragio de personas  
extranjeras residentes

Susana Riquelme Parra

Octubre 2025

## OBSERVATORIO DE REFORMAS POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA

### Cómo citar:

Riquelme Parra, Susana. 2025. Chile Reforma Electoral: Aumento del requisito de residencia para el sufragio de personas extranjeras residentes. México: Observatorio de Reformas en América Latina, IIJ-UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17544558>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17544558>

Susana Riquelme Parra



0000-0003-0730-2987



Este documento está disponible bajo licencia de Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CCBY-NC-SA4.0). Se permite copiar, distribuir y transmitir esta publicación, así como usarla y adaptarla, siempre que sea únicamente para fines no comerciales, se reconozca adecuadamente la publicación y se distribuye bajo una licencia idéntica. Para obtener más información sobre esta licencia, consulte el sitio web de Creative Commons: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

## Chile Reforma Electoral: Aumento del requisito de residencia para el sufragio de personas extranjeras residentes<sup>1</sup>

Susana Riquelme Parra<sup>2</sup>

### I. Introducción

Este análisis aborda la negociación política que llevó a aprobar en septiembre de 2025 una reforma electoral que eleva de 5 a 10 años el requisito de residencia para que personas extranjeras puedan sufragar en Chile, con cómputo desde la residencia definitiva y regulación de salidas para resguardar la continuidad. Esta reforma fue tramitada en paralelo a la reposición de multas asociadas al voto obligatorio. El contexto es de alta competitividad presidencial, ya que en noviembre de 2025 se llevará a cabo el desarrollo de elecciones presidenciales y del poder legislativo. Junto a ello, la expansión del padrón extranjero y presiones cruzadas por “normalizar” el estándar chileno respecto del comparado internacional sin alterar reglas a semanas de la elección. En este escenario, el Congreso Nacional de Chile articuló una salida en paquete (multas más requisitos) que habilitó mayorías transversales.

En términos normativos, la reforma quedó incorporada en la Constitución Política de Chile, mediante la Ley N° 21.773, que modifica el derecho de sufragio de personas extranjeras al elevar de 5 a 10 años el umbral temporal, anclar el cómputo al estatus de residencia definitiva y regular las salidas del país en el período computable. Además, se estableció una entrada en vigor diferida a 2026 para preservar la estabilidad de las reglas frente a la elección presidencial de 2025 (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [BCN], 2025a; Senado de la República de Chile, 2025a).

Este análisis adopta el enfoque de proceso y negociación de reforma del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Se basa en (i) documentos oficiales de tramitación (actas, informes y votaciones), (ii) registros y estadísticas del Servicio Electoral (SERVEL) sobre padrón y composición del electorado, (iii) piezas comparadas (GlobalCIT, IDEA) y (iv) notas institucionales de Senado.cl y

---

<sup>1</sup> Documento elaborado en el marco del proyecto “Construyendo Reformas Políticas Eficaces en América Latina” Código 101976 con adscripción en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la dirección de la Dra. Flavia Freidenberg.

<sup>2</sup> Académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política. Universidad de Concepción. Investigadora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina.

Camara.cl que recogen posiciones públicas. Se reconstruye la secuencia legislativa 2025–2026, se mapean actores y argumentos, y se sitúa el cambio en perspectiva comparada.

En cuanto a actores, desde el Ejecutivo (Presidencia y Ministerio Secretaría General de la Presidencia [SEGPRES], junto al Ministerio del Interior y Ministerio Secretaría General de Gobierno [SEGEOB], se buscó viabilizar las multas para hacer efectivo el carácter obligatorio del sufragio y, en paralelo, elevar umbrales al voto extranjero en clave de reciprocidad y estándar comparado. En el Congreso Nacional, las comisiones de Constitución y de Gobierno canalizaron el debate con senadoras/es de oficialismo (izquierda y centroizquierda) y oposición (derecha tradicional y derecha conservadora), tensionando alcance (nacional vs. local) y exigencias (tiempo, estatus, continuidad). En la Cámara de Diputadas y Diputados, bancadas de ambos bloques impulsaron o criticaron indicaciones alternativas, condicionando apoyos cruzados entre el componente sancionatorio y los nuevos requisitos.

Los actores partidarios y candidaturas exhibieron incentivos heterogéneos frente a la composición del padrón migrante. El oficialismo (izquierda y centroizquierda) y la oposición (derecha tradicional y derecha conservadora) valoraron de manera distinta los costos y beneficios del paquete, en función de la distribución territorial y del perfil del electorado extranjero.

Los actores técnico-institucionales y societales aportaron insumos clave. El SERVEL reportó para el Padrón Auditado 2024 un total de 15.450.574 habilitados, de los cuales 786.466 son extranjeros (5,1%); la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) desagregó territorios con alta concentración de electores extranjeros, insumo para estimar impactos (SERVEL, 2024; BCN, 2025b). Encuestas universitarias y estudios recientes mostraron heterogeneidad en las preferencias del voto migrante, evitando estereotipos de comportamiento uniforme (Panel Ciudadano-UDD, 2025). Desde la sociedad civil, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y Ekhos aportaron evidencia sobre conocimiento y disposición a participar, mientras el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) difundió minutas censales por comuna/región que reforzaron la dimensión territorial del debate (Ekhos, 2021; SJM, 2022; SERMIG, 2025).

Este análisis se concentra en el sufragio de personas extranjeras residentes, no en el voto desde el exterior de connacionales. La evidencia comparada ubica la extensión del voto nacional a residentes como una excepción frente a la regla más difundida de conceder derechos en el ámbito subnacional (GlobalCIT, 2023). Sobre esta base, el informe reconstruye: (i) posiciones y estrategias de los actores; (ii) la secuencia legislativa y los puntos de intercambio que moldearon el texto final; (iii) la ubicación comparada de la reforma; y (iv) lecciones sobre capacidad de negociación política en materia electoral.

## II. Antecedentes de la reforma

El punto de partida de la reforma aprobada en 2025 da cuenta de que Chile permitía votar en todos los niveles a personas extranjeras avecindadas por más de cinco años que cumplieran los requisitos generales (ser mayores de 18 años y no tener condenas por delitos de pena aflictiva), de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución y la Ley N.º 21.325. Para efectos electorales, ese cómputo se hacía desde la residencia temporal y la inscripción era automática en el Registro Electoral mediante la información periódica que el SERMIG remitía al SERVEL, conforme a la Ley 18.556 (DFL N.º 5) (SERVEL, 2022; BCN, 2025b; BCN–DFL 5, 2017).

Esta institucionalidad explica la magnitud y la territorialización del padrón extranjero. En el Padrón Auditado 2024, 786.466 electores (5,1%) eran personas de nacionalidad extranjera; entre 2017 y 2024 el padrón extranjero creció 194,4% (SERVEL, 2024; BCN, 2025b).

En paralelo, Chile reestableció el voto obligatorio por reforma constitucional (Ley N.º 21.524, publicada el 4 de enero de 2023), mandando a una ley orgánica para fijar multas y exenciones. Esa implementación se materializó recién a fines de septiembre de 2025, cuando el Congreso aprobó sanciones entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales para quienes no sufraguen, medida aplicable a ciudadanos chilenos, generándose transitoriamente un diseño asimétrico respecto de electores extranjeros habilitados (Diario Oficial, 2023; Senado de Chile, 2025b).

El diagnóstico más reiterado por el Ejecutivo y diversos actores fue el desalineamiento comparado, ya que a nivel mundial sólo cinco países han reconocido el sufragio de personas extranjeras residentes en todas las elecciones (Uruguay, Nueva Zelandia, Chile, Malawi y Ecuador); la regla general es circunscribir el voto extranjero a comicios locales y/o exigir residencia permanente o nacionalidad para elecciones nacionales (Altman, et al., 2023; NZ Electoral Commission, s.f.; IMPO–Uruguay, s.f.; CNE–Ecuador, s.f.).

La reforma constitucional chilena (Boletín 17.823-07) respondió a ese cuadro elevando de 5 a 10 años el requisito temporal, anclando el cómputo a la residencia definitiva y regulando la continuidad del vínculo territorial mediante un tope de 90 días de salidas del país por cada período de 12 meses. Asimismo, incorporó una entrada en vigor diferida a 2026, evitando alterar reglas de competencia a semanas de la elección presidencial de 2025. Todo ello quedó plasmado en la Ley N.º 21.773 y en el Mensaje presidencial que la originó (Cámara de Diputados y Diputados, 2025a; BCN, 2025a; Senado

de Chile, 2025a). La regla de vigencia diferida se alinea con el estándar de estabilidad del derecho electoral de la Comisión de Venecia, que desaconseja cambios fundamentales menos de un año antes de la elección (Comisión de Venecia, 2002).

En perspectiva normativa, dos familias de justificación sustentan la inclusión (y sus umbrales) de personas extranjeras residentes: el principio del *stakeholding*, es decir, quienes mantienen vínculos estables y están afectados de modo sistemático por las decisiones públicas deben participar en su gobierno, y, el principio de sujeción a la coerción, lo que significa que quienes están sometidos al poder estatal tienen derecho a voz en su configuración. Elevar el umbral temporal, exigir residencia definitiva y regular la continuidad del vínculo territorial son instrumentos que aproximan pertenencia efectiva y reducen la brecha entre sujeción y representación (Bauböck, 2007; Abizadeh, 2008; Song, 2009).

### III. Posiciones y estrategias de los actores. Mapa de actores y alineamientos ideológicos

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric (centroizquierda/izquierda) primero intentó (marzo de 2025) introducir límites al voto extranjero en la discusión de multas por voto obligatorio; esas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por la Comisión de Gobierno del Senado por exceder la idea matriz. Luego optó por desacoplar y encauzar el tema vía reforma constitucional específica, buscando subir de 5 a 10 años el requisito, computado desde la residencia definitiva, con regla de salidas máximas de 90 días en 12 meses, y vigencia diferida a 2026. En paralelo, patrocinó reponer multas al incumplimiento del deber de votar (0,5 a 1,5 UTM) aplicables solo a “ciudadanos” (excluyendo, por tanto, a extranjeros habilitados). Estratégicamente, el Ejecutivo articuló un “paquete” (multas más reforma) que pudiera lograr mayorías amplias en la Cámara de Diputadas y Diputados, y, en el Senado, buscando respetar el estándar de estabilidad de reglas en año electoral (Comisión de Venecia, 2002).

La oposición de derecha (Chile Vamos: RN–UDI–Evópoli), apoyó sin ambigüedades elevar requisitos y endurecer sanciones, disputando el guarismo de la multa (propuestas para subir a 3 UTM) y emplazando al Gobierno por la oportunidad temporal de la discusión. En Sala y comisiones, senadores UDI y RN enfatizaron convergencia con el derecho comparado (voto extranjero generalmente limitado a lo local y con estatus permanente) y el principio de reciprocidad (Senado de Chile, 2025c; Cámara de Diputadas y Diputados, 2025d).

La derecha radical (Partido Republicano), respaldó el alza de requisitos y empujó (junto a sectores de Chile Vamos) la delimitación a elecciones locales como horizonte legislativo próximo. Sus intervenciones en Sala se alinearon con el marco de “anomalía” chilena en el comparado y de reforzar pertenencia política antes del acceso al sufragio nacional. (Senado de Chile, 2025b).

El oficialismo de izquierda (Frente Amplio, PC, PS, PPD), convergió en el aumento de requisitos (voto unánime en el Senado) pero visibilizó reservas: (i) evitar “cálculos electorales” en medio de campaña; (ii) discutir con evidencia el alcance local/nacional del sufragio migrante; (iii) mantener entrada en vigor diferida para no alterar reglas en el ciclo en curso. (Senado de Chile, 2025d).

En cuanto a los órganos técnico-institucionales (SERVEL, BCN), no “toman partido”, no obstante, proveyeron insumos que estructuraron la negociación, como el padrón 2024 (15.450.574 habilitados; 786.466 extranjeros = 5,1% del padrón), su crecimiento 2017–2024 (194,4%) y concentración territorial, usados en comisiones para dimensionar impactos y justificar el alza de requisitos. (SERVEL, 2024; BCN, 2025b).

En términos de alineamiento comparado y “estabilidad de reglas”, hubo mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputadas y Diputados al invocar que solo cinco países permiten sufragio de personas extranjeras residentes en todos los niveles (Uruguay, Ecuador, Nueva Zelanda, Malawi y Chile), mientras la regla común es limitarlo a elecciones locales y exigir estatus permanente. Se añadió el estándar de la Comisión de Venecia para no aplicar cambios sustantivos dentro del año previo a una elección (de ahí la vigencia desde 2026). (Senado de Chile, 2025d; Comisión de Venecia, 2002).

Se identificó como problema del arreglo previo, el cómputo desde residencia temporal y la ausencia de una regla explícita sobre salidas; la reforma “re-ancha” el cómputo en residencia definitiva y fija el umbral de 90 días en 12 meses. (Senado de Chile, 2025d) propuesto por el Ejecutivo.

Con respecto a la obligatoriedad del voto y la simetría de sanciones, el Senado repuso multas (0,5–1,5 UTM) solo para “ciudadanos”, generando asimetría transitoria respecto a extranjeros habilitados. La Cámara de Diputadas y Diputados, y, el Senado debatieron montos (1 UTM vs 3 UTM) y causales de excusa, consolidando un consenso operativo para hacer exigible el voto obligatorio restablecido en 2023. (Senado de Chile, 2025c).

Tabla 1: Régimen sancionatorio por no votar

Condición	Obligación 2025	Multa 2025	Vigencia 2025	Obligación 2026	Multa 2026
Ciudadanía chilena	Obligatorio	0,5–1,5 UTM (aproximadamente \$35–\$103 mil)	Desde 09– 10/2025	Obligatorio	0,5–1,5 UTM (vigente)
Personas extranjeras residentes	No obligatorio	No aplica	—	No obligatorio	No aplica

Fuente: elaboración propia con base en Senado.cl y Diario Oficial.

En comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados se introdujo el argumento de reciprocidad (p. ej., mención a Uruguay y exigencias de largo vecindamiento) y, en paralelo, bancadas de izquierda y centroizquierda advirtieron contra cambios percibidos como estratégicos en contexto electoral, prefiriendo resolver el alcance local/nacional en una ley posterior (Cámara de Diputadas y Diputados, 2025d; Senado de Chile, 2025d).

La trayectoria de los actores y sus argumentos combina un impulso gubernamental por “regularizar” una excepción comparada con incentivos partidistas cruzados ante un padrón extranjero en alza. En términos analíticos, el paquete Gobierno-Congreso se asemeja a una reforma de élites con justificación normativa, que busca anclar legitimidad en estándares internacionales (Venecia) y evidencia administrativa (SERVEL/BCN), reduciendo la apariencia de “ingeniería” de ciclo corto (Renwick, 2010; Bowler, et al., 2006).

La literatura sugiere que las élites activan marcos normativos (integridad, estabilidad, comparado) cuando coexisten ganancias electorales inciertas y costes reputacionales por reformar en año electoral; ese patrón se observa en la vigencia diferida y en el énfasis oficial sobre “normalización” más que beneficio partidista (Renwick, 2010; Bowler & Donovan, 2016; Comisión de Venecia, 2002).

#### IV. Proceso legislativo y dinámicas de negociación. Evolución de la discusión legislativa (2025)

Las primeras indicaciones del Ejecutivo (marzo de 2025) para limitar el voto de extranjeros fracasaron. La Comisión de Gobierno del Senado las declaró inadmisibles por exceder la idea matriz del proyecto que reponía las multas por no votar. Ante ello, el Gobierno reencauzó la materia mediante un mensaje de reforma constitucional autónomo (Boletín 17.823-07), ingresado el 9 de septiembre de 2025 con urgencia y tramitación acelerada (Cámara de Diputadas y Diputados, 2025a).



En primer trámite, la Comisión de Constitución del Senado conoció el proyecto en dos sesiones y la Sala lo aprobó el 10 de septiembre por unanimidad de los presentes, despachándolo a segundo trámite (Senado de Chile, 2025d). En paralelo, el Senado envió a tercer trámite el proyecto que repone multas por incumplimiento del voto obligatorio, permitiendo que ambas piezas avanzaran en tándem hacia la Cámara (Senado de Chile, 2025c). El 29 de septiembre, la Cámara de Diputadas y Diputados ratificó ambos textos: (i) la ley de multas (0,5–1,5 UTM) con 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones; y (ii) la reforma constitucional sobre sufragio de extranjeros con 142 votos a favor y 4 abstenciones. Con ello, el Congreso despachó a ley el paquete electoral (Cámara de Diputadas y Diputados, 2025b).

El contenido sustantivo se afinó en comisión antes del paso a Sala del Senado. Además de elevar de 5 a 10 años el requisito temporal, se redefinió el hito de cómputo (el avecindamiento se cuenta desde la residencia definitiva, no desde la temporal), se incorporó una regla de continuidad territorial que interrumpe el cómputo por salidas superiores a 90 días en cualquier período de 12 meses, y se agregó una disposición transitoria de entrada en vigor en 2026. La Comisión de Constitución del Senado también coordinó esa vigencia con la existencia de multas al incumplimiento del deber de sufragio (paquetización de reforma más multas), lo que aseguró mayorías en ambas cámaras. El texto final se promulgó como Ley 21.773 (7 de octubre de 2025), consolidando estos parámetros en el artículo 14 constitucional (BCN, 2025a; Senado de Chile, 2025a).

La secuencia exhibe tres mecanismos clásicos de negociación en reformas electorales (Renwick, 2010): (i) desacople de una táctica fallida (indicaciones inadmisibles) hacia un vehículo idóneo (mensaje autónomo, con el quórum correspondiente, explicitado en la Tabla de la Sesión 73 de la Cámara); (ii) paquetización de contenidos (multas + reforma) para equilibrar concesiones cruzadas entre oficialismo y oposición; y (iii) estabilidad temporal de reglas al diferir la vigencia (2026), en línea con el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral de la Comisión de Venecia, que desaconseja cambios sustantivos dentro del año previo a una elección (Cámara de Diputadas y Diputados, 2025c; Comisión de Venecia, 2002).

En términos de alineamientos, la derecha (Chile Vamos y Republicanos) empujó por endurecer requisitos y asegurar sanciones efectivas; el oficialismo de izquierda convergió en el alza y en la vigencia diferida, manteniendo abierto (para una ley posterior) el debate sobre acotar el sufragio migrante al ámbito local (Senado de Chile, 2025a; 2025b).

El resultado normativo refleja esas transacciones: (i) umbral de 10 años con anclaje en residencia definitiva; (ii) regla de continuidad territorial ( $\leq 90$  días de salidas por año); (iii) vigencia desde 2026; y (iv) asimetría transitoria de deberes (la multa por no votar recae en ciudadanos, dejando exento al electorado extranjero habilitado en 2025). Esta consistencia intertemporal es coherente con estándares de estabilidad del derecho electoral y con la necesidad de sincronizar estatus migratorio y pertenencia política antes del acceso al sufragio nacional (BCN, 2025a; Senado de Chile, 2025a, 2025b; Comisión de Venecia, 2002).

Tabla 2: Cronología legislativa de la reforma al sufragio de personas extranjeras residentes

Fecha	Etapas	Hito	Órgano	Documento clave	Efecto en la negociación
03/2025	Táctica fallida	Indicaciones del Ejecutivo para limitar el voto de personas extranjeras residentes en proyecto de multas; declaradas inadmisibles por exceder la idea matriz.	Senado (Comisión de Gobierno)	Actas de Comisión (mar 2025)	Se desacopla la materia y se prepara mensaje autónomo.
09/09/2025	Ingreso de Mensaje Presidencial	Ingreso del Mensaje Presidencial de reforma constitucional autónomo (Boletín 17.823-07), con urgencia para su tramitación.	Congreso Nacional (inicio de tramitación)	Tabla / Boletín 17.823-07	Habilita canal constitucional idóneo y reinicio del proceso.
10/09/2025	1er trámite	Aprobación en Sala del Senado por unanimidad de las y los presentes.	Senado (Sala)	Registro de Votación 10/09/2025	Pasa a segundo trámite con amplio apoyo.
29/09/2025	2° trámite / paquetización	Cámara de Diputadas y Diputados aprueba: (i) reforma constitucional (142 a favor, 4 abst.) y (ii) ley de multas (127 a favor, 7 en contra, 11 abst.).	Cámara de Diputadas y Diputados (Sala)	Acta / Registro de Votaciones 29/09/2025	"Paquete" cerrado y despachado desde el Congreso.
07/10/2025	Promulgación	Promulgación de la Ley N.º 21.773 que modifica el art. 14 (sufragio de personas extranjeras residentes).	Ejecutivo / BCN / Diario Oficial	Ley 21.773 (07/10/2025)	Norma publicada; cierre del ciclo legislativo.
2026	Entrada en vigor	Vigencia diferida desde 2026 para preservar estabilidad de reglas en la elección 2025.	Sistema electoral	Disposición Transitoria; Comisión de Venecia	Estabilidad intertemporal de reglas ("regla del año previo").

Fuente: elaboración propia con base en Senado.cl (actas y noticias), Camara.cl (tramitaciones y votaciones) y BCN (Ley 21.773).

La campaña electoral de 2024 en Puerto Rico estuvo marcada por un enfoque diverso en las estrategias de los candidatos, quienes se centraron en movilizar sus bases y conectar con los votantes. Las estrategias de campaña, adaptadas al contexto político de la isla, reflejaron un panorama dinámico y competitivo, donde la combinación de métodos tradicionales y digitales jugó un papel esencial para alcanzar a diferentes segmentos del electorado.

#### V. Comparación con reformas similares en otros países

En la práctica comparada, solo un conjunto reducido de países extiende el sufragio en elecciones nacionales a personas extranjeras residentes. Nueva Zelanda lo permite a residentes permanentes que hayan vivido 12 meses continuos en el país en algún momento de su vida (Electoral Commission, s. f.). Uruguay reconoce el derecho al voto a extranjeros de buena conducta, con familia constituida y 15 años de residencia habitual, además de otras condiciones documentales; no se exige adquirir previamente la ciudadanía legal, aunque el procedimiento se acredita ante la Corte Electoral mediante certificado de residencia (Constitución de la República Oriental del Uruguay, art. 78; IMPO–Corte Electoral, 2022). Malawi habilita la inscripción de personas extranjeras residentes con siete años de residencia ordinaria (Malawi Electoral Commission, 2023). Ecuador reconoce el voto facultativo a personas extranjeras con cinco años de residencia legal (Constitución de la República del Ecuador, art. 63; CNE, s. f.). Con la Ley N.º 21.773, Chile se incorpora a este conjunto excepcional, elevando el umbral a 10 años, exigiendo residencia definitiva y regulando la continuidad del avecindamiento (BCN, 2025a; Senado de la República de Chile, 2025a; International IDEA, 2025).

En términos analíticos, los casos difieren en tres ejes: (i) alcance (todos los países citados reconocen el derecho para elecciones nacionales, aunque Ecuador lo define como facultativo); (ii) umbral temporal (12 meses en Nueva Zelanda, 5 años en Ecuador, 7 en Malawi, 10 en Chile, 15 en Uruguay); y (iii) estatus/continuidad (Chile y Uruguay anclan en estatus permanente + trazabilidad del vínculo territorial; Nueva Zelanda opera por residencia permanente con continuidad mínima histórica). Este patrón confirma que el voto nacional de personas extranjeras residentes es una excepción global, tesis sostenida por la literatura comparada reciente (Altman, Huertas-Hernández & Sánchez, 2023; IDEA, 2025).

Tabla 3: Reglas comparadas sobre sufragio de personas extranjeras residentes

País	Alcance (nivel electoral)	Años de residencia	Estatus migratorio exigido	Regla de continuidad / Observaciones
Chile	Nacional (presidencial y legislativo)	10 años	Residencia definitiva	Salidas $\leq$ 90 días por cada 12 meses; vigencia de la reforma desde 2026.
Uruguay	Nacional	15 años de residencia habitual	Buena conducta y familia constituida; acreditación ante Corte Electoral	No hay tope anual explícito; procedimiento ante Corte Electoral.
Nueva Zelanda	Nacional	12 meses continuos (en algún momento)	Persona extranjera con residencia permanente	Se exige haber residido 12 meses continuos en NZ; sin tope anual explícito.
Malawi	Nacional	7 años de residencia ordinaria	Persona extranjera con residencia ordinaria	Sin regla explícita de continuidad anual.
Ecuador	Nacional (facultativo)	5 años	Residencia legal	Voto facultativo para personas extranjeras con residencia legal.

Fuente: elaboración propia a partir de BCN (Ley 21.773), Senado.cl, CNE Ecuador, IMPO Uruguay, Electoral Commission NZ y MEC Malawi.

## VI. Conclusiones sobre la capacidad de negociación política en materia electoral

La tramitación de 2025 muestra que el sistema político chileno dispone de manera condicionada su capacidad de negociación en reformas electorales. Primero, el cambio de vehículo tras la inadmisibilidad de las indicaciones de marzo (del intento fallido de enmendar la ley de multas a un mensaje de reforma constitucional autónomo) y la paquetización con la ley de sanciones por no votar, constituyeron ingeniería procedimental que corrigió el desacople inicial, habilitó concesiones cruzadas y generó mayorías amplias en ambas cámaras. La entrada en vigor diferida a 2026 operó como dispositivo reputacional ante la crítica de oportunismo y, a la vez, como ficha de intercambio para consolidar el acuerdo (Senado de Chile, 2025a; Comisión de Venecia, 2002).

Segundo, el acuerdo exhibe una racionalidad de élite consistente con la literatura de reforma electoral; cuando las rentas inmediatas son inciertas, las coaliciones tienden a encuadrar el cambio en estándares normativos (integridad, comparado, reciprocidad) y evidencia técnica (padrón, concentración territorial), disminuyendo el costo político de alterar reglas sensibles (Renwick, 2010; Bowler, Donovan & Karp, 2006; Bowler & Donovan, 2013). En Chile, los datos oficiales de SERVEL y la sistematización de BCN funcionaron como *input* coordinador para justificar el anclaje en residencia definitiva, la continuidad territorial ( $\leq 90$  días) y el umbral de 10 años (SERVEL, 2024; BCN, 2025).

Tercero, la negociación produjo un equilibrio consistente pero incompleto. Es consistente porque alinea la regla chilena con criterios comparados de pertenencia efectiva (residencia estable más continuidad), preserva la estabilidad temporal de las reglas (regla del “año previo”) y hace exigible el voto obligatorio mediante multas para ciudadanos. Es incompleto porque deja una asimetría transitoria (electores extranjeros habilitados sin sanción en 2025) y pospone (como agenda de segunda fase) la definición del alcance local y/onacional del sufragio extranjero, explícitamente diferida para no fracturar el consenso (Senado de Chile, 2025a; 2025b; Comisión de Venecia, 2002).

Este análisis aporta un marco de negociación de reformas con tres mecanismos observados: cambio de vehículo, paquetización y secuenciación temporal, lo que permite explicar que se construyeron mayorías en contextos competitivos. Sobre esa base, se conectan criterios normativos operativos (stakeholding/sujeción y estabilidad de reglas) con decisiones de diseño (umbral, estatus migratorio y continuidad territorial), tendiendo así un puente analítico entre la teoría de la inclusión democrática y la arquitectura institucional finalmente adoptada. Para el seguimiento posreforma (2026–2028) se proponen indicadores verificables: evolución del padrón extranjero efectivo, niveles de movilización y patrones territoriales de participación; eventuales brechas de acceso asociadas a estatus y tiempos de residencia; y efectos de la asimetría transitoria en el régimen sancionatorio.

De este análisis se desprende, además, una hipótesis de reapertura de agenda, ya que, si la movilización del electorado extranjero produce efectos territoriales no triviales o emergen disparidades relevantes, es plausible que el sistema político renegocie el alcance del sufragio (nacional/local) teniendo en consideración las nuevas correlaciones de fuerza. En síntesis, el caso chileno combina aprendizaje institucional (respeto al estándar de la Comisión de Venecia), uso estratégico de peritaje (datos de SERVEL/BCN) y secuenciación para evitar quiebres en año electoral; pero mantiene un núcleo de conflicto diferido (quién y cuándo integra el electorado efectivo) que deja abierta una ventana de renegociación conforme avance la evidencia posimplementación (BCN, 2025a; Senado de Chile, 2025a, 2025b; Comisión de Venecia, 2002; Renwick, 2010).

Para 2026–2028, sería muy interesante que se incorporen indicadores sensibles a género en el padrón efectivo y en participación (p. ej., brechas de participación de mujeres migrantes según nacionalidad/edad y restricciones por cuidados), a fin de detectar barreras que la nueva regla de residencia pudiera acentuar o reducir en términos de participación electoral.

## VII. Referencias bibliográficas

- Abizadeh, A. (2008). Democratic theory and border coercion: No right to unilaterally control your own borders. *Political Theory*, 36(1), 37-65. <https://doi.org/10.1177/0090591707310090>
- Altman, D., Huertas-Hernández, S., & Sánchez, C. T. (2023). Two paths towards the exceptional extension of national voting rights to non-citizen residents. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2023.2182713>
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2025a). Ley N° 21.773: Modifica la Carta Fundamental en materia de derecho de sufragio de personas extranjeras. <https://www.bcn.cl/leychile/Navegar?idNorma=1217272>
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2025b). Padrón electoral de extranjeros en Chile: Estadísticas. [https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio%2F10221%2F37053%2F2%2FBCN\\_Voto\\_de\\_extranjeros\\_en\\_Chile\\_estadisticas.docx.pdf](https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio%2F10221%2F37053%2F2%2FBCN_Voto_de_extranjeros_en_Chile_estadisticas.docx.pdf)
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2017). DFL N.° 5: Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N.° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. <https://www.bcn.cl/leychile/Navegar?idNorma=1107717>
- Bowler, S., & Donovan, T. (2013). *The limits of electoral reform*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/the-limits-of-electoral-reform-9780199695409>
- Bowler, S., Donovan, T., & Karp, J. A. (2006). Why politicians like electoral institutions: Self-interest, values, or ideology? *The Journal of Politics*, 68(2), 434–446. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2006.00418.x>
- Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. (2025a). Tramitación del Boletín N.° 17.823-07: Modifica la Carta Fundamental, en materia de derecho de sufragio de personas extranjeras (Ingreso 9 de septiembre de 2025). <https://www.camara.cl/legislacion/proyectosdeley/tramitacion.aspx?prmBOLETIN=17823-07>

Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. (2025b). Resultados de votación en Sala: Proyecto de reforma constitucional (Boletín N.º 17.823-07) y proyecto de multas por no votar [Acta / Registro de Votaciones]. <https://www.camara.cl>

Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. (2025c). Tabla y Acta de la Sesión 73 (septiembre 2025): Tramitación del Boletín N.º 17.823-07 [Documento parlamentario]. <https://www.camara.cl>

Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. (2025d). Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental, en materia de derecho de sufragio de personas extranjeras (Boletín N.º 17.823-07).  
[https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=85255&prmTipo=INFORME\\_COMISION](https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=85255&prmTipo=INFORME_COMISION)

Comisión de Venecia. (2002). Código de buenas prácticas en materia electoral. Consejo de Europa. [https://www.venice.coe.int/images/SITE%20IMAGES/Publications/CodeGoodPracticeElectoral\\_ES\\_P.pdf](https://www.venice.coe.int/images/SITE%20IMAGES/Publications/CodeGoodPracticeElectoral_ES_P.pdf)

Consejo Nacional Electoral (CNE). (s. f.). Normativa que le rige (art. 63 Constitución): voto de personas extranjeras residentes. <https://votoenelexterior.cne.gob.ec/quienes-somos/normativa-que-le-rige/>

Diario Oficial de la República de Chile. (2023, 4 de enero). Ley N.º 21.524: Modifica la Constitución para restablecer el voto obligatorio. <https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/117242/L%2021524%20CHI.pdf>

Ekhos. (2021). Voces migrantes (Publicación 01). <https://ekhos.cl/publicacion01/>

GlobalCIT. (2023, 30 marzo). Two paths towards the exceptional extension of national voting rights to non-citizen residents. <https://globalcit.eu/two-paths-towards-the-exceptional-extension-of-national-voting-rights-to-non-citizen-residents/>

IMPO–Uruguay. (s. f.). Constitución de la República Oriental del Uruguay (art. 78). <https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967/78>

International IDEA. (2025). Regulación internacional del voto de personas extranjeras: Evidencia comparada [Nota técnica]. <https://www.idea.int/sites/default/files/2024-09/202501-modalidades-voto-extranjero.pdf>

Malawi Electoral Commission. (2023). Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, 2023. <https://mec.org.mw/wp-content/uploads/2023/03/Presidential-Parliamentary-and-Local-Government-Elections-Act-2023.pdf>

Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador. (2021). Constitución de la República del Ecuador (act. 2021). [https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador\\_act\\_ene-2021.pdf](https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf)

New Zealand Electoral Commission. (s. f.). Are you eligible to enrol and vote? <https://vote.nz/enrolling/get-ready-to-enrol/are-you-eligible-to-enrol-and-vote/>

Panel Ciudadano – Universidad del Desarrollo. (2025, 8 julio). Voto inmigrante: Kast y Matthei lideran, Jara concentra mayor rechazo [nota de prensa] <https://gobierno.udd.cl/noticias/2025/07/voto-inmigrante-kast-y-matthei-lideran-jara-concentra-mayor-rechazo/>

Renwick, A. (2010). The politics of electoral reform: Changing the rules of democracy. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511676390>

S

Senado de la República de Chile. (2025a). Promulgación y oficio al Ejecutivo: Reforma constitucional sobre sufragio de personas extranjeras (Boletín N.º 17.823-07) [Registro de tramitación]. <https://www.senado.cl>

Senado de la República de Chile. (2025b). Con multas entre \$35 mil y \$103 mil: Comisión de Gobierno despacha a Sala proyecto que sanciona a quienes no concurran a votar. <https://www.senado.cl/comunicaciones/noticias/con-multas-entre-35-mil-y-103-mil-comision-de-gobierno-despacha-sala>

Senado de la República de Chile. (2025c). A tercer trámite: proyecto que establece multa por el incumplimiento del deber de votar. <https://www.senado.cl/comunicaciones/noticias/tercer-tramite-proyecto-que-establece-multa-por-el-incumplimiento-del-deber>



Senado de la República de Chile. (2025d). Unánime apoyo a reforma que aumenta requisitos para el voto de extranjeros. <https://www.senado.cl/comunicaciones/noticias/unanime-apoyo-reforma-que-aumenta-requisitos-para-el-voto-de-extranjeros>

Servicio Electoral de Chile. (2024). Aumentos de extranjeros en el Padrón Auditado 2024. <https://www.servel.cl/2024/07/31/aumentos-de-extranjeros-en-el-padron-auditado-2024/>

Servicio Electoral de Chile. (2022). El voto de los electores extranjeros en Chile. <https://www.servel.cl/2022/07/22/el-voto-de-los-electores-extranjeros-en-chile/>

Servicio Nacional de Migraciones. (2025). Minuta población extranjera residente en la comuna de Santiago. <https://serviciomigraciones.cl/wp-content/uploads/estudios/Minutas-Comuna/RM/Santiago.pdf>

Song, S. (2009). Democracy and noncitizen voting rights. *Citizenship Studies*, 13(6), 607–620. [https://lawcat.berkeley.edu/record/1122805/files/Song\\_Democracy\\_and\\_noncitizen\\_voting\\_rights.pdf](https://lawcat.berkeley.edu/record/1122805/files/Song_Democracy_and_noncitizen_voting_rights.pdf)